
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Pastor i Peiró, Esperança; Bodelón, Encarna, dir. La prostitución en tiempos de pandemia : un enfoque sociológico y jurídico. 2021. 51 pag. (1285 Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/245121>

under the terms of the  license



LA PROSTITUCIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

UN ENFOQUE SOCIOLOGICO Y JURÍDICO

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Derecho

Bellaterra, 14 de Mayo de 2021



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

Autora: Esperança Pastor i Peiró

Tutora: Encarna Bodelón González

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	- 1 -
2	CONSIDERACIONES PREVIAS.....	- 3 -
3	LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN LAS QUE SE REALIZA LA PROSTITUCIÓN	- 6 -
3.1	PRE-COVID 19	- 6 -
3.1.1	<i>La calle</i>	- 7 -
3.1.2	<i>Los clubs</i>	- 11 -
3.1.3	<i>Los pisos</i>	- 14 -
3.1.4	<i>Desde la perspectiva de género</i>	- 16 -
3.2	CAMBIOS SOCIOLÓGICOS EN EL COVID-19.....	- 17 -
4	EL PARAGUAS LEGAL.....	- 23 -
4.1	NORMATIVA	- 23 -
4.2	CAMBIOS DE LA NORMATIVA EN EL COVID-19	- 29 -
4.2.1	<i>Movilidad</i>	- 30 -
4.2.2	<i>Economía</i>	- 32 -
4.2.3	<i>Protección, prevención e higiene</i>	- 35 -
4.2.4	<i>Plan de contingencia</i>	- 36 -
5	CONCLUSIONES.....	- 38 -
6	BIBLIOGRAFÍA.....	- 40 -

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto estudiar la vulneración desde la incidencia provocada por el Covid-19, en el sector de la prostitución y las distintas respuestas del Gobierno para intentar paliar esta situación.

La prostitución, en la actualidad, es un tema controvertido en el que se discierne entre diversos modelos teóricos, los cuales son valorados de forma distinta, por lo que no acaba de establecerse una solución. Esta razón, es la que convierte al colectivo que lo conforma, en vulnerables. Desencadenando toda una serie de efectos sociológicos que van a incidir de lleno en la vida de estas personas. Ahora bien, estos aspectos en un contexto donde se ha modificado toda la organización social, política y económica, van a sufrir importantes cambios, generando una exacerbación de la vulneración.

Para abordar estos cambios, se va a descender por los efectos ya presentes en el colectivo, y así poder identificar las modificaciones y variaciones de éstos, en el nuevo escenario. Por otra parte, el texto también examinará la situación jurídica en la que se encuentra el Estado Español en materia de prostitución, y así posteriormente discurrir entre las políticas adoptadas a raíz del Real Decreto 463/2020, para examinar si se han tomado medidas específicas, destinadas a la protección de las personas que ejercen la actividad sexual, o por el contrario la protección de estas personas ha sido tratada a través de las medidas generales.

Palabras clave: Prostitución, Covid-19, vulneración, políticas públicas.

1 INTRODUCCIÓN

La llegada rocambolesca de la pandemia Covid-19, ha perturbado a los ciudadanos de todo el mundo, pues este virus de rápida expansión ha conseguido llegar hasta el último recoveco del planeta, desafiando a los Gobiernos que se han visto obligados a adoptar medidas a contrarreloj, con tal de ganarle la carrera y que a día de hoy aún no se ha conseguido vencer.

Esta variante de coronavirus no solo arrasa por donde pasa, sino que a cada paso que da hunde una piedra, por lo que no solo se han previsto medidas de contención, sino que ha sido necesario adoptar normas para intentar esgrimir y mitigar las secuelas sociales y económicas que está generado.

Sin embargo, en periodos de crisis como la actual, el impacto no es uniforme, sino se manifiesta de forma desigual entre los distintos colectivos y sujetos, incrementándose en aquellos cuyos presentan una mayor vulnerabilidad.

En este orden, el Estado tiene un papel imprescindible, pues deberá tenerlos en cuenta en las prioridades políticas, sociales y económicas, para que las medidas adoptadas sean lo más efectivas posibles sin dejar a nadie atrás.

Siguiendo esta lógica, en las siguientes líneas se va a analizar en qué medida los factores sociales y políticos inciden en la vulnerabilidad, concretamente este fenómeno lo pretendo abordar y analizar desde uno de los sectores más olvidados y afectados de nuestra sociedad; la prostitución.

Dentro de esta temática pretendo hacer un análisis de los factores sociales y jurídicos que entrañan al sector y así ponerlos de manifiesto mediante un análisis evolutivo respecto a la situación anterior, durante y posterior de la crisis acontecida en este 2020 – 2021.

A este respecto, el siguiente trabajo se organizará en torno a dos grandes bloques, de los cuales, a su vez, van a estar compuestos por otros dos subapartados. Esta estructuración singular tiene una significación muy notable, en tanto que a mi entender

va a facilitar el examen de si la situación actual es la misma que se venía dando con anterioridad, especialmente en este periodo de crisis, o por el contrario ha evolucionado. Así como, poder vislumbrar los posibles riesgos emergentes que puedan atentar en un futuro próximo.

En primer lugar, se encuentra el marco sociológico. De este, se va a desmembrar en el análisis de los efectos sociológicos que se dan en la prostitución, así como las posibles causas principales a las que se debe. Seguido del análisis del impacto que ha causado en los mismos el Covid-19. Esto me va a permitir observar las distintas dimensiones de la vida de las mujeres que ejercen la actividad sexual, en las cuales, la vulnerabilidad se ha hecho más patente.

El segundo bloque, contiene del marco jurídico, donde en un primer momento y para obtener información más ajustada a la realidad que se precisa investigar, se presentará la situación jurídica en la que actualmente se encuentra la prostitución en España. Llegados a este punto, se abordará de manera pormenorizada, como el conjunto de normativas adoptadas por el Gobierno bajo el amparo del Estado de Alarma, ha tomado en consideración a este colectivo.

Todo ello, desembocará con unas reflexiones finales bajo la nomenclatura de conclusiones, que tienen por objeto dejar fuera de dudas si tal fenómeno se ha visto agravado o por lo contrario su situación se ha visto mejorada con la pandemia.

2 CONSIDERACIONES PREVIAS

Previamente, creo importante por la materia que se trata, esclarecer dos aspectos que deben estar presentes en todo momento para no caer en confusión durante la lectura del trabajo.

En primer lugar, el vocabulario utilizado para redacción ha tomado la variante femenina para referirse a las personas que ejercen la prostitución. No obstante, esta terminología no pretende ser excluyente, sino más bien situar en el epicentro del análisis a las mujeres, ya que pese haber otros sujetos que desempeñen este ejercicio, estas van a presentar una vulnerabilidad, como prostitutas, y una vulnerabilidad específica en tanto que mujer por su género.

Y en segundo lugar, remarcar las distinciones existentes entre la trata, el tráfico de personas, y la prostitución.

A estos efectos, el *Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional*, define **tráfico de personas** como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.” (Art. 3 Protocolo, 15 noviembre 2000)

Esta actuación, está contemplada en el título XV bis referente a “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” del Código Penal como delito, y más específicamente el artículo 318 bis, el cual ha llevado algunas críticas por no ser suficientemente diáfano con el bien jurídico que se intenta proteger.

La **trata de personas** es definida, por el *Protocolo para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*, como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.” (Art 3 Protocolo, 15 de noviembre 2000)

De esta definición se extraen por tanto **tres** elementos sustanciales:

- La **acción**, que consistirá en la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas
- Los **medios empleados**, como la fuerza, la coacción, el engaño, abuso de poder etc.
- **Finalidad**: la explotación sexual, esclava, trabajos forzosos, servidumbre, extracción de órganos.

Esta actividad suele estar motivada por ser la principal fuente de ingresos de quien lo realiza, por lo que el delito esta motivado por el beneficio económica fruto de la explotación de las víctimas. (Fernández, 2011)

Como en el tráfico de personas, también la trata se encuentra recogida en el Código Penal, concretamente en el título VII bis “de trata de seres humanos”.

En su único artículo 177 bis, se intenta proteger a todas las víctimas de explotación de “la imposición de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación sexual, incluida la pornografía; y la extracción de sus órganos corporales”

Otro matiz importante, es que “el consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo”.

Este fenómeno se mueve como una especie de delgado hilo pues debido a la invisibilidad y clandestinidad de la actividad, resulta muy difícil contabilizar los casos para entender mejor el fenómeno.

En definitiva “La trata de personas es una amenaza multidimensional. Priva a las personas de sus derechos humanos y libertades, aumentan los riesgos de salud mundial y fomenta el crecimiento del crimen organizado” (Morales, 2010)

Finalmente la **prostitución** es un concepto más complejo, pues existe una amplitud de definiciones, una primera conceptualización un tanto insípida, es la que realiza la Organización Mundial de la Salud “actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien”

Otras definiciones precisan de dos elementos claves para considerar el intercambio como prostitución, la frecuencia y la multitud de personas con las que el acto se realiza. Partiendo de este supuesto se podría afirmar que la prostitución es una actividad que se hace, por lo que es inherente a la persona, es decir, no se es. (Perramon, 2008)

Como se ha señalado, son conceptos que presentan interconexiones pero tienen una lógica distinta y por lo tanto, no pueden aglutinarse como una globalidad. Por esta razón el contenido de este trabajo está planteado única y exclusivamente desde la óptica de la prostitución.

3 LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN LAS QUE SE REALIZA LA PROSTITUCIÓN

3.1 PRE-COVID 19

Sin duda el contexto en el que nos movemos constituye un camino de guijarros para aquellos bienaventurados que deciden adentrarse en los profundos debates legales de la prostitución.

Pero mientras éstos se esgrimen acaloradamente entre los distintos argumentos por tratar de imponer un resultado legal, la realidad que golpea es otra, pues la prostitución no se ha quedado congelada durante estos años a la espera de una decisión que ponga fin a esta controvertida situación, sino más bien, todo lo contrario.

Y justamente, a raíz de esta continuación en la actividad, se han ido aviniendo una serie de consecuencias sociológicas, hasta la actualidad donde el nuevo escenario pandémico ha modificado parte de nuestra sociedad y con ello las implicaciones sociológicas de las personas que ejercen la actividad sexual.

Es por ello, que en lo que sigue se pondrá de relieve los aspectos sociológicos que se venían dando, no tanto de una manera exhaustiva, pero si suficiente para establecer el precedente del cambio que va a comportar en éstos la visita de este virus expansivo.

Para abordar estos matices, es necesario esclarecer que no podemos ubicar todo el ejercicio de esta actividad en un mismo cajón, sino que existen y conviven distintas modalidades que se han ido creando y conformando en el tiempo, y aunque en ocasiones se asemejaran, en otras van a presentar grandes diferencias.

El parámetro que establece los tipos de prostitución, con carácter general, se va a determinar por el espacio físico donde se desarrolle la actividad sexual. De esta forma aun pudiendo existir otros, distinguimos tres tipos que resultan de suma transcendencia para analizar el impacto que tienen en la salud y en la economía. Y que va a permitir realizar un análisis posterior de las variaciones producidas con la llegada del ya nombrado Covid-19.

3.1.1 La calle

Todos en algún momento de nuestra infancia, hemos transitado por alguna carretera, donde especialmente nos ha llamado la atención la presencia de alguna mujer mostrando sus largas piernas o una simple silla vacía en mitad de la nada. Y con toda la inocencia de un niño nos hemos preguntado quién era esa mujer o qué significaba esa silla solitaria.

Esta figura tan singular, que alguna que otra vez nos ha llevado a formularnos estas interrogaciones, son las trabajadoras sexuales que se encuadran dentro de la tipología callejera, y por las características del lugar, es la modalidad más visual y conocida, y por ende la más controlada por las autoridades, instituciones y entidades no gubernamentales (Pinedo, 2008; Serra 2008).

Pero más allá de la presencia de una mujer que vende su cuerpo en una esquina en las calles de una ciudad, hay un ser, el cual se ve afectado por el impacto de diversos efectos que adolecen en la vida profesional y privada de las personas que desempeñan esta práctica.

I. Impacto en la salud

Hay numerosos estudios que ahondan y aportan un sentido a la manera en que el trabajo afecta a la salud de los trabajadores, como el Modelo Demanda-Control-Apoyo desarrollado por (Karasek, 1990), el presentado por Goldenhar o como el de Håvold. Éste último, afirma la importancia en la seguridad del factor cultural, tanto es así que afirma que “son los factores culturales y contextuales que crean las actitudes y el comportamiento que influyen en el trabajo” (Jon Ivar Håvold, 2009). Entonces determina que el seguimiento de las normas y la comunicación de las mismas viene determinado por el contexto cultural.

Y resulta que la prostitución ha sido objeto de controversia y confrontación entre distintos sectores, incluso desde antes de la Ilustración, donde se discute bajo argumentos de carácter sociológico, político, filosóficos y éticos, sobre la legalidad o no. Esto ha ido provocando ásperas confrontaciones centradas en regímenes

político-jurídicos, que no han hecho más que perpetuar el estigma asociado de la prostitución.

En efecto, partiendo de una interpretación puramente literal, la salud es conceptualizada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948)

En esta definición se determina los aspectos de bienestar esenciales para la plena salud, así pues, partiendo de este punto, se va a ir aquilatando la medida en que inciden en esta tipología y en las siguientes cada uno de estos tres estados.

A. Físico

La alteración de la salud más perceptible es la que se presenta a nivel **físico**, esta incidencia puede presentarse por distintos factores:

En primer lugar, puede generarse como resultado de la **violencia**, el abuso y la degradación sexual, que acostumbra a manifestarse en circunstancias donde se rompe el contrato relacional entre meretriz-cliente,¹ “desde el punto de vista del contrato, la prostituta es poseedora de una propiedad en su persona que contrata parte de esta propiedad en el mercado” (Paterman, 1995).

¹ Sirva de ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, donde condena a prisión a un hombre que agredió sexualmente y lesionó a una prostituta, en julio de 2017. El acusado, según los hechos probados, se aproximó a la víctima que se encontraba en la Estación de Autobuses de Albacete ejerciendo la prostitución, donde ambos «acordaron realizar el acto sexual a cambio de dinero», sin embargo ya en la arboleda que serviría de lugar de prestación, éste le comunicó que no tenía dinero y que «le pagaría posteriormente», a lo que ella, «se opuso a la relación acordada e intentó marcharse», ante lo cual el acusado la empujó y tiró al suelo «introduciéndole la mano en la boca impidiéndole respirar, comenzando a quitarle la ropa con ánimo libidinoso». «También le decía éste que si no accedía a mantener relaciones sexuales la mataba ». (SAP de Albacete 197/2020, de 17 de julio de 2020)

De igual manera ocurrió en Zaragoza, donde el pasado septiembre, detuvieron a un hombre de 39 años, por una presunta violación de una prostituta con la que había concertado unos servicios sexuales que derivaron en una agresión. El motivo fue un cambio “de decisión solicitando otros servicios diferentes a los contratados, negándose en todo momento la víctima”, y fue ante esta negativa cuando el hombre “la sometió mediante amenazas de muerte, golpeándola con gran fuerza y asiéndola con ambas manos del cuello para asfixiarla y provocándole pérdida de conocimiento”, finalizando esta escena, con el abandono de la víctima inconsciente en un descampado de las afueras de la ciudad.

De esta forma, “la quiebra del acuerdo hace que los clientes utilicen la fuerza física y la imposición del miedo y de la humillación para que sus deseos sean atendidos” (Cavalcante Carvalho Moreira y Ferreira De Souza, 2012)

Por estas razones frecuentemente sufren “lesiones vaginales y anales, pérdidas de piezas dentales, disminución auditiva y de visión así como diabetes y cardiopatías. Aunque muchas de estas enfermedades son comunes al resto de la sociedad, la atención médica, no es la misma (Hermoso, 2019).” (citado en Rueda Marroquín, 2019)

En segundo lugar, cabe incidir en la asociación hecha a este colectivo sobre la prevalencia de **enfermedades de transmisión sexual**, la más común es el VIH-Sida. La infección, tanto en España como en Europa, es causada por el consumo de drogas por vía intravenosa, por tener relaciones con una persona seropositiva sin protección, tener relaciones múltiples sin protección o exhibir conductas o prácticas de sexo poco seguro.

En todo caso, la prostitución no es determinante, a no ser que ocurran estas circunstancias, por ejemplo en las situaciones de violaciones vistas anteriormente, sin embargo, “las mujeres que ejercen la prostitución han sido consideradas clásicamente como un grupo de alto riesgo para la transmisión de VIH a la población general. Pero las prevalencias de VIH entre las mujeres que ejercen son más bajas de lo que podría esperarse, al menos en nuestro país, y se asocian a otros factores de riesgo ya mencionados: el consumo de drogas vía intravenosa, conductas de riesgo y tener parejas seropositivas (Belza, et al., 2000; Day y Ward, 2004; McKeganey y Bernard, 1996; Sánchez et al., 2003; Sanders, 2005; Solana, 2003; Vanwesenbeeck, 2001; Ward, Day, Green, Cooper, y Weber, 2004; Ward, Day y Weber, 1999).” (citado en Cavalcante Carvalho Moreira y Ferreira De Souza, 2012)

Además, debe considerarse que suele estar ejercida por mujeres drogodependientes por lo que tienen una mayor exposición a enfermedades de transmisión sexual y al consumo de drogas ilegales. (Fernández 2011).

Y finalmente, el tercer punto a señalar, son las condiciones de **salubridad y seguridad**. Éstas suelen ser degradantes por la exposición a las adversidades

climatológicas (lluvia, calor, frío etc.) a las que se someten. Junto a esto, se debe sumar la falta de espacios donde llevar a cabo la higiene íntima.

B. Bienestar mental

Por su parte a nivel **psíquico**, pese a no ser perceptible a simple vista, está presente en la mayoría de las situaciones por la complejidad que presenta ya que “abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental”(OMS, 2017), por tanto, se trata del “estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.” (Psicoral, 2014)

Esta afectación dentro del área de la salud mental, se deriva del estrés y las tensiones del entorno de la actividad, causado principalmente por el **miedo** a ser agredidas físicas o sexualmente por algún cliente potencialmente violento. Esto explica que suelen estar juntas en la calle y se avisen cuando se van a realizar algún servicio. Por otra parte, también temen a los robos y a los controles policiales (sobre todo las inmigrantes). En definitiva, este miedo viene fundado porque estos riesgos son más frecuentes en la calle (Fernández 2011).

C. Bienestar social

En consecuencia, todos estos factores y riesgos diversos acaban conduciendo a situaciones de **vulnerabilidad** y **exclusión social**, tanto como prostitutas, como mujeres, es decir, se construye una imagen despectiva que tienen de sí mismas, en la cual acaban perdiendo “el referencial de mujer, madre, hija, ciudadana” (Cavalcante Carvalho Moreira y Ferreira De Souza, 2012), sufriendo así problemas de autoestima y una autoconcepción quebradiza. Donde la principal causa, reside en la estigmatización ejercida por la sociedad, y que puede llegar a interiorizarse por la mujer que ejerce, la cual queda indefensa ante la sociedad.

Especialmente, esta modalidad sufre el “**rechazo** manifestado por los vecinos y a la frecuente victimización de la que son objeto por parte de la sociedad en general

y de algunas instituciones que intervienen en este ámbito cayendo en el error de victimizarlas por la simple razón de ejercer en la calle” (Fernández 2011).

II. Condiciones económicas

Hay que aludir ahora a un aspecto bien singular, como son las retribuciones percibidas como concepto de su actividad. Estas son escasas, pero se quedan con la totalidad de la cuantía.

A este respecto, una exprostituta señalaba que “eres libre, puedes cobrar lo que quieras y hacer con el dinero lo que quieras, en los clubes no, por eso preferí antes la calle que lo que se supone que es la opción más segura” (Llamas, 2019)

3.1.2 Los clubs

Los clubs, junto con la calle, conforma las dos formas de prostitución más remotas y tradicionales en el tiempo.

En particular, esta variante se ejerce en establecimientos, que cuentan con servicios de bar de copas, o con espectáculos. Y en pocas palabras, se describen como espacios cerrados, con escasa ventilación e iluminación, en el que básicamente se trabaja en horario nocturno y se descansa durante el día.

Además, en estos sitios pese haber una mayor libertad para escoger a los clientes, existe la constante vigilancia de los dueños de los locales acerca del número de clientes y consumiciones hechas a lo largo de un periodo corto de tiempo.

I. El impacto en la salud

A. Bienestar Físico

Esta categoría se desenvuelve en un ambiente donde el alcohol y las drogas se convierten en el alma de la noche. Por lo que, este coctel molotov va a suponer diferentes consecuencias en función de la posición en la que se encuentre la persona dentro de la relación.

Por una parte, si es el cliente quien consume estas sustancias, va a ver alteradas sus capacidades de percepción y razonamiento, dejando puerta abierta a la impulsividad y a la violencia. En el peor de los casos, esta violencia acaba culminando con

violaciones, pues en ocasiones, y a consecuencia de la actividad prestada, se desdibuja el concepto de *libre consentimiento*, dicho en palabras de la Organización de Trabajadoras Sexuales (2019) “somos trabajadoras, no somos violación de pago.” O en palabras de Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, (CATS): "El sexo sin consentimiento es violación, aunque sea una prostituta" (Asensio, 2018)

Por otra parte, también puede ocurrir que sea la prostituta quien esté bajo los devastadores efectos del alcohol y las drogas. Se trata de una vía de escape para soportar y hacer más llevaderos las situaciones adversas que envuelven su día a día. Ya que se utiliza como una alternativa para afrontar psicológicamente el momento de encuentro con clientes y/o proxenetas, así como las consecuencias psicológicas generadas por el ejercicio de la prostitución (Cusick, 1998; Cepeda, 2006; Philpot et ál., 1989; Meneses, 2008 citados en Meneses 2010).²

En este sentido, el estudio sobre el consumo de drogas durante el ejercicio, analizado por Brewis y Linstead (2000, p. 86), explica que las drogas pueden ser usadas por múltiples motivos en el mundo de la prostitución, “algunas veces para mantener a las trabajadoras despiertas durante largos días y largas noches (...), algunas veces para relajarlas y aliviar la sensación de lo poco placentero que es el trabajo. Algunas veces esto también ayuda a jugar el papel requerido en el trabajo para llegar a ser el producto que los clientes demandan.” Para muchas personas, el consumo durante el ejercicio es considerado como una estrategia para incrementar su confianza, su control, su fortaleza psicológica etcétera. (Meneses, 2007, Fernández 2004, Pinedo, 2008)³ sin embargo, puede conllevar el efecto contrario: la pérdida del control, menor percepción del riesgo, etc., factores que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad hacia los riesgos de carácter sexual y episodios de violencia (Vanwesenbeeck, 2001)

² Citado en Cavalcante Carvalho Moreira y Ferreira De Souza, 2012

³ Citado en Fernández, 2011

De forma paralela, la escasa comida ingerida combinada con las drogas y el alcohol acaba transportándolas hacia un horizonte abocado a un sinfín de problemas intestinales.

B. Bienestar Mental

La noche y las largas jornadas, tampoco son buenos aliados del bienestar mental, porque la combinación de ambos va a causar importantes trastornos del sueño, causados por el cansancio y por la alteración de los ritmos circadianos.

Esta dificultad para dormir, asociada al insomnio, va a absorber la energía de las prostitutas cual agujero negro, apoderándose de ellas el cansancio, la falta de concentración y la irritabilidad (ASCO, 2018)

De igual manera, en este ámbito también va a predominar el miedo fundado por la percepción de peligro que ostentan en los encuentros donde el cliente se ha excedido con el alcohol u otras sustancias.

En resumen, dentro del área de la salud mental, este colectivo va a experimentar depresión, ansiedad, miedo, estrés, fobia..., que acaban en irritabilidad e insomnio y en algunos casos trastornos de la alimentación.

C. Bienestar Social

Una vez más, los horarios nocturnos van a dificultar las relaciones sociales, desembocándolas en el aislamiento social, cuyas causas van a comportar problemas en el bienestar emocional, como la depresión.

II. Condiciones económicas

El cauce económico de esta modalidad va a presentar diferencias respecto de la anterior donde la cuantía percibida era íntegra.

Aquí, las condiciones económicas se van a basar a partir de comisiones, esto es que no va a depender del rendimiento personal, sino de factores externos, y además se van a establecer deudas.

A título ilustrativo de estas deudas conviene traer a colación, un recurso de casación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el despido de una prostituta

en un club madrileño, en el que de forma diáfana se observa como los proxenetas esquilman injustamente a las mujeres que trabajan para ellos. (TSJ 1338/2019)

En concreto, en los hechos probados se relata como se le exigía a la demandante el pago de noventa euros por el alquiler de una habitación en un Apartahotel de la empresa. El fin era el trasladar a los clientes del club a la habitación ,para prestar los servicios de carácter sexual. E incluso se le exigía dos euros por el cambio de ropa de cama y toallas.

3.1.3 Los pisos

Esta modalidad va a ser por antonomasia la más invisible y discreta. Así pues, se desempeña en domicilios privados que pueden estar conformados por varias mujeres, también pueden estar regentados por una Madame o simplemente ocupados por una sola mujer.⁴

Se caracterizan por ser céntricos y conocidos, aunque para garantizar la privacidad, intimidad y discreción, normalmente solo se van a encontrar en ciudades grandes.

La hermeticidad va a comportar el constructo de redes y organizaciones de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual (Fernández, 2011)

I. Impacto en la salud

A. Bienestar Físico

Esta clase de prostitución es la que mejor estado de salud presentan, ya que tienen un mayor acceso a los sistemas sanitarios y sociales (CIMTM, 2002; Emakunde, 2001, 2007; López y Pinedo, 2005, 2008; Serra, 2008)⁵

⁴ Madame: f.coloc. Persona que regenta un prostíbulo (RAE, 2001)

⁵ Citado en Fernández (2011)

B. Bienestar Mental

Una vez más, se presenta el temor al las posibles reacciones y comportamientos de los cliente, exacerbándose cuando la actividad sexual se realizar en hoteles o en domicilios de los propios clientes, por lo que acostumbran a evitan las citas con desconocidos.

De este miedo se desprende la inseguridad de quedarse solas con el cliente, así pues, tienden a mentir sobre la cantidad de personas que se encuentran en ese mismo momento presentes en el piso. (Fernández, 2011)

C. Bienestar Social

Por su idiosincrasia, esta categoría no se encuentra tan ajena ni aislada de la sociedad, como hemos visto que ocurría en otras modalidades.

Interconectado con las otras clases de bienestar, de esta socialización se va a desprender un refuerzo de la autoestima al decrecer el sentimiento de soledad, cosa que va a estimular los lazos afectivos con los seres queridos.

En definitiva, el entorno social “cubre las necesidades emocionales, racionales y físicas del ser humano” (Lacpoop s.f)

II. Condiciones económicas

En cuanto a los beneficios, la cuestión estriba entre el tipo de piso que se trate.

Tal es el caso, que en aquellos donde existe una Madame, las ganancias se van a repartir entre ésta y las meretrices. A cambio, la Madame se hará cargo de los gastos y mantenimiento del inmueble, así como de aquellos derivados del ejercicio de la prostitución como son; preservativos, productos de higiene íntima, publicidad etc.

Sin embargo, cuando se carezca de esta figura, las prostitutas convivientes percibirán íntegramente los importes derivados de su actividad. Las tareas de mantenimiento del hogar y los costes se repartirán comunalmente.

Finalmente, en aquellos casos donde el inmueble solo está conformado por una mujer, será ella misma la que soportará los costes, aunque también es cierto que se quedará la totalidad de sus ingresos. No obstante, tendrá carta blanca para organizar su jornada, así como el volumen de clientes. (Fernández, 2011)

Es de cierta importancia destacar que, en este ámbito del ejercicio no se exige una gran inversión económica, ya que sería suficiente con alquilar un piso y promocionarse por medios de comunicación o redes sociales. Esto va a comportar una ventaja económica, ya que con gran facilidad se va a poder abrir y cerrar pisos.

3.1.4 Desde la perspectiva de género

A la luz de estos principales indicadores sociológicos en el ámbito de la prostitución, no debe caer en el olvido otros que aun no siendo propios de este ámbito, inciden en estas mujeres, *per se*, es decir por su condición como tal.

Aunque las mujeres hemos avanzado a lo largo de la historia, a pasos de gigante, para conseguir la igualdad y así equilibrar la situación de los derechos. Pero la ley fricciona con la realidad que lejos de lograr la integración y la plena igualdad con el hombre, sigue habiendo numerosas desigualdades y falta de concienciación a nivel social.

A día de hoy, ya han transcurrido las dos primeras décadas del siglo XXI, y sin embargo, sigue persistiendo la desigualdad por razón de género en los mercados de trabajo, empleo, la calidad de vida y las condiciones laborales.

Simplemente se señalarán sin entrar en sus distinciones, ya que a nivel de su extensión va a ocupar un gran espacio. De esta forma, las desigualdades más notorias y que no con poca frecuencia derivan en discriminación, son las siguientes: en materia de **salarios**, que vienen dadas por la brecha salarial; las desigualdades en **el tiempo de trabajo**, la carga de éste se presenta de forma desigual por ambos sexos, produciendo el efecto de la *doble carga mental de la mujer*; la desigualdad en la **carrera laboral**, esto es, la infrarrepresentadas en la jerarquía profesional, más conocido como el *techo de cristal*, causado principalmente por la segregación vertical;

y la desigualdad en el **reconocimiento en el empleo**, que viene dado por la segregación horizontal.

La compaginación de estas dos dimensiones – prostituta, mujer – va a traer como resultado una vulneración aún mayor, como bien afirmaba Ninfa, la portavoz del colectivo AFEMTRAS “La sociedad en la que vivimos es machista y nos discrimina como mujeres y después, como prostitutas” (Rodríguez, 2018)

En esta misma línea, la Fundación Solidaridad Democrática (1988) identifica este fenómeno como una consecuencia de las sociedades patriarcales. Bajo este argumento, explica que la prostitución femenina tiene su razón, por una parte, por la “posición de inferioridad social y económica” en el transcurso del tiempo, y por otra, la división sexual del trabajo, que va a fomentar a la prostitución femenina en situaciones de crisis, porque en estos periodos el escaso empleo será para el hombre. (Pastor, 2014/2015)

Juliano (2002) va más allá, señalando que la consecuencia de las sociedades patriarcales es la estigmatización de la prostitución, es decir, “mujer que ejercía por ser una mujer capaz de sobrevivir de forma independiente” y de esto último afirma que si esta desvalorizada es porque quien la ejercen son mujeres.

También Garaizbal (2008) culpa al patriarcado por ser el sustento de este estigma, ya que el patriarcado clasifica a las mujeres según la sexualidad de cada una. Y añade Juliano (2002) que esta causa provoca que el resto de las mujeres dediquen todo su esfuerzo por no asemejarse a las personas que sí que ejercen.

3.2 CAMBIOS SOCIOLÓGICOS EN EL COVID-19

El coronavirus aterrizó en España el 31 de enero, con un caso en la Gomera, y a finales de febrero ya se había propagado, primeramente en las comunidades de Madrid, Valencia y Cataluña, y después, de forma progresiva y paulatina, al resto de autonomías, pero a principios de marzo a causa de un descontrol brusco de contagios en Madrid, se decidió pasar a un nivel de contención forzada, que se tradujo en el cierre de toda la actividad educativa de la región.

Para entonces, la evolución del virus había adoptado un ritmo fugaz de expansión y la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, calificó la situación de emergencia de salud pública como pandemia internacional, llevando al Gobierno a aprobar medidas drásticas para hacer frente a esta coyuntura.

La excepcionalidad derivada por la pandemia ha traído cambios que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad, como el relacional, el sanitario, el económico etc. impactando, por tanto en la prostitución, generando nuevos efectos y riesgos a las personas que la ejercen.

Volviendo la vista atrás, donde explicábamos el fuerte vínculo de este ejercicio con el contexto cultural y el estigma, no es de extrañar que a raíz del virus se haya señalado que las prostitutas son fuentes de transmisión de la enfermedad, es por esta razón y por otras más que se tomaron medidas legales, tanto directas hacia el sector como indirectas. Las cuales tuvieron gran impacto en la vida sociología de las prostitutas. Puesto que si en circunstancias normales ya percibíamos sujetos y condiciones que por su índole eran más vulnerables, en este estado de excepción, se va a generar una vulnerabilidad aún mayor, como el resultado de las condiciones sociales que ubica en situaciones diferenciadas a las personas, en cuanto a las posiciones socioeconómicas, estatus social, género etc. y la falta de acceso a los servicios más básicos.

En este sentido, la prostitución de **calle** fue presentada como la modalidad de mayor vulnerabilidad y la primera la cual se vio afectada, ya que la principal medida de el Covid-19 fue la limitación de la libertad de circulación, reservando el acceso a las vías públicas para la realización de unas escasas actividades tasadas en el Real Decreto del 14 de marzo, por este motivo, se paralizó la actividad económica de las personas que ejercían en la calle, impidiendo cubrir las necesidades básicas. (Oblatas del Santísimo Redentor, 2020)

Pero no solo tuvo transcendencia por el impacto económico, sino también por presentar una mayor exposición de riesgos de contagio del virus, en vista de que las características propias de la actividad sexual exigen un contacto directo y no permiten tomar medidas de prevención adecuadas y efectivas. En un intento de utilizar

un símil que no es muy preciso ni correcto, pero creo que es gráfico, se podría comparar este riesgo, con el presentado hacia otras enfermedades, por ejemplo, las de transmisión sexual. Pero como se indica, este apunte es impreciso porque para éstas, existen prevenciones efectivas como es el uso de preservativos.

En una segunda instancia, cuando el confinamiento aminoró y parecía que volverían a su normalidad, se toparon con la imposición del toque de queda. Esto conllevó un cambio brusco de su horario habitual para poder adaptarse a esta nueva realidad, provocando así nuevas situaciones de vulnerabilidad, como se explica en esta entrevista del diario Información «Hay que empezar a trabajar muy pronto para volver a casa a la hora. Y se arranca casi de día, no me gusta. Me da vergüenza, hay mucha gente». (González, 2020)

Atendiendo a estas consecuencias de necesidad económica y frete a la dificultad de ofrecer sus servicios, muchas han optado por abandonar la calle, para insertar en pisos y en menor medida en clubes.

El traslado minoritario de la calle a los **clubes** tiene su fundamento en la iniciativa tomada por el Ministerio de Igualdad, donde insta a las comunidades autónomas al cierre de estos locales, provocando así el éxodo hacia los pisos o en otras situaciones más extremas hacia migraciones interprovinciales, con el fin de continuar con la actividad.

El cierre de los clubes no ha eximido el pago de las deudas adquiridas por las prostitutas hacia los proxenetas, más bien sigue incrementándose cada día que pasa a consecuencia de la “diaria”, esto es el uso de las habitaciones, comida, y otros elementos de primera necesidad. Cosa que ha reforzado a que las mujeres sigan prostituyéndose en sitios alternativos, con precios más bajos y de forma más clandestina, es decir, de forma más precaria, y sin medidas de protección, con tal de poder hacer frente a esos gastos ante el temor infundado de ser expulsadas a la calle. La directora de Apramp, Rocío Mora, respecto a esto argumenta que “no van a perdonar las deudas pues las mujeres son una materia prima que les ha costado un dinero. Si ese cuerpo no renta, esa mujer es desechable. En cuanto presentan los primeros síntomas del COVID-19, las echan de donde estaban” (Paniagua, 2020)

Mientras tanto, la actividad en los **pisos** se ha puesto en cabeza como la modalidad de prostitución más empleada por su característica más notoria; el hermetismo. Como se ya ha dicho, se trata de un tipo de prostitución que tiene como elemento constituyente la discreción e invisibilidad. Esto provoca una dicotomía puesto que parece beneficioso, en el sentido que facilita la continuidad del ejercicio sin casi riesgo de ser detenidas por el difícil control que le supone al orden policial. No obstante, por otra parte acarrea estremecedoras situaciones clandestinas que van desde el encuentro infortunio de un cliente, hasta la llamada trata de víctimas sexuales, donde la situación dentro del contexto de la prostitución en estos espacios, se complica aun más por el escaso contacto que pueden mantener las distintas entidades sociales con ellas para apoyarles (González 2020).

De las evidencias anteriores, se puede extraer claramente una serie de efectos que se han intensificado a raíz de la pandemia, así como otros que se han constituido como nuevos, entre ellos cabe destacar; el aumento de vulnerabilidad, el riesgo de contagio, la pobreza y exclusión social; si sumamos el incremento de la violencia, la coacción y la explotación, acaba desembocado en unas situaciones nefastas y precarias tanto a nivel profesional, como personal.

Agravándose para las personas que no disponen los papeles en regla que frente al miedo de ser detenidas e identificadas, se abstienen de acudir a la sanidad pública, incluso presentando síntomas. Otras, directamente se encuentran encerradas y carecen de información o incluso sobre la existencia del virus presentado “dificultades para retener y organizar la información que reciben.”

Otra cuestión importante, también ha sido la proyección que ha tenido a nivel **psicológico**, según el informe presentado por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, sobre el *impacto del Covid-19 en las mujeres que ejercen prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual*, establece que las mujeres encuadradas en estos ámbitos han “experimentado aislamiento, ansiedad, soledad, desprotección, apatía, angustia, desesperanza, aumento del nivel de estrés, desorientación etc.” así como “incertidumbre e inseguridad ante el futuro incierto por las consecuencias de la crisis” y una “preocupación por sus hijos y familiares en países de origen”, también “miedo a contagiarse, a ser agredidas por el aumento

de agresividad que provoca el confinamiento”(Oblatas del Santísimo Redentor, 2020)

Todo esto ha acabado afectando a la salud **física** en forma de “cefaleas, dolores de estómago, cansancio, insomnio, o alteración del sueño” (Oblatas del Santísimo Redentor, 2020)

Por otra parte, también resulta crucial examinar el impacto del Covid-19 desde una óptica de género, ya que la imperatividad diferenciada en la posición que se ocupa en la sociedad, a veces desigual y desequilibrada en el “acceso a los recursos económicos, el empleo, los recursos naturales, el reparto de tiempo y trabajos, el acceso a los espacios de poder, la sostenibilidad del estado de bienestar” (Gálvez y Rodríguez, 2012) va a comportar unos efectos muy heterogéneos en situaciones de crisis, ya no solo entre las distintas profesiones, sino entre sexos, afectando así en la calidad de vida de las mismas.

Siendo así, es obvio que el brote del virus ponga de manifiesto las desigualdades preexistentes de las mujeres dentro y fuera del mercado laboral, a causa del empeoramiento de las cargas atribuidas ya mencionadas: la sobrerrepresentación en sectores más afectados, el reparto desigual del trabajo doméstico, la conciliación entre la vida laboral y familiar, entre otras. (Eurofound 2020)

De las afirmaciones anteriores, se puede extraer las diferentes dimensiones de la vida de las mujeres donde las desigualdades se han hecho más patentes. Según el estudio del observatorio de igualdad del *Institut Català de les Dones*,⁶ se ha mostrado que profesiones heterogéneas, clásicamente sesgadas y precarizadas han sido el montante de la base para contener la crisis.

Estas vinculaciones, no solo se han visto históricamente feminizadas, sino que además se han sido devaluadas y poco reconocidas. Sin embargo tienen un valor esencial, tal es así que ha impactado en el Covid causando efectos directos en el

⁶ Institut Català de les dones. (2020). *L'impacte de gènere de la Covid-19 en dades*.

tiempo destinado a la realización de estas actividades sustanciales. Pues se ha visto notablemente aumentado a consecuencia de algunas medidas de contingencia adoptadas por el Gobierno, como el cierre de escuelas, el confinamiento y las tareas de cuidados. Situación que ha supuesto una carga adicional para las familias, pero soportadas de manera desproporcional por las mujeres. Esto que ha fomentado una sobrecarga de trabajo no remunerado detonando en reducciones de jornadas laborales para poder conciliar esta dicotomía.

Adicionalmente, como en el resto de las profesiones, las prostitutas se adaptaron para mantenerse activas sin infringir las restricciones impuestas, de esta forma, se proliferó el teletrabajo, y así lo explicaba Janie en el *Español*, “Pues qué vamos a hacer si no se puede salir; teletrabajar como todo el mundo”. (López, 2020)

Aunque con el fomento del teletrabajo, se ha introducido un aspecto perteneciente al espacio público en la esfera privada, cosa que ha dificultado la desvinculación de ambos durante el ejercicio de estos, y a demás con peores recursos frente a los hombres, por lo que ha culminado en situaciones de pérdida de trabajo que a su vez ha dimanado en una desprotección social de las mujeres.

En síntesis, el Coronavirus ha generado un nuevo escenario social y económico que ha afectado al conjunto de la sociedad, pero con más ímpetu al género femenino, que sin la cobertura de un paraguas legal, ni un control sanitario específico, ha tenido que lidiar con las adversidades de un virus que no ha hecho más que proliferar y engendrar dificultades y riesgos de las personas que se dedican a ejercer la actividad sexual.

4 EL PARAGUAS LEGAL

4.1 NORMATIVA

Estos efectos sociológicos previstos anteriormente, presentan una concatenación en las distintas respuestas legales existentes en España, que desembocan en una influencia directa o indirecta en el fenómeno de la prostitución.

Pero antes de entrar en materia, resulta transcendente pormenorizar los distintos enfoques jurídicos que se pueden utilizar para afrontar este fenómeno, propios de las opciones legales en otros países, que han persistido de forma continua en el tiempo y que hoy en día siguen coexistiendo.

Por lo tanto, existen tres modelos de tratamiento normativo, el sistema prohibicionista, el sistema proderechos y el sistema abolicionista.

Según Daniela Heim (2007), el sistema **prohibicionista** “supone la penalización del ejercicio de la prostitución y de cualquier forma de proxenetismo y/o explotación de la prostitución ajena”

En la actualidad, pese haber pocos estados que se acojan públicamente, son numerosos los que poseen matices en las distintas normas o practicas de este modelo. (Heim, 2007)

El **reglamentarismo** del siglo XIX, ponía de relieve la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. El origen de los contagios se imputó a las prostitutas a causa del estigma social y jurídico hacia ellas y del peligro público que suponían.

Bajo esta lógica prevencioncita y imputacionista, aparece por primera vez como finalidad de las actuaciones estatales y normativas, el anhelo de evitar la existencia de este tipo de enfermedades en la población. Por lo que se realizó intervencionismos policiales e higiénicos limitando la ubicación de los burdeles, con el fin de que

la prostituta tuviese una apariencia decente, respetable y discreta.⁷En definitiva, subyacía una postura restrictiva por parte del sistema hacia la libre prostitución.

La característica intrínseca de este sistema, es la posibilidad de acceder a la seguridad social, y la cobertura de los derechos sociales y sanitarios, aunque por otra parte están sujetas a impuestos, y en caso de incumplimiento de las ordenanzas reguladoras de horarios y lugares, están bajo los efectos de las sanciones recogidas en el Código Penal.

El sistema **proderechos** apareció en 1980 a partir del reclamo del reconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad social, y también contra los controles sanitarios impuestos por los reglamentaristas.

De esta forma, coincide con el modelo reglamentarista, en lo referente a la voluntad de mantener la prostitución, es decir, la no pretensión de prohibición. No obstante, se desgajan en tanto que persiguen objetivos distintos, pues este modelo proderechos busca otorgar derechos sociales fundamentales en equiparación con trabajadores de otras índoles con el fin de “alcanzar una justicia social de los derechos” (Villacampa, 2012: 81- 142)

Finalmente el modelo **abolicionista** considera que todas las modalidades de prostitución son perniciosas en relación con los derechos humanos, de esta forma, las personas que ejercen la prostitución son víctimas de un sistema abusivo y violento. Esta lógica configura el sistema mayoritario en Europa Occidental del siglo XX. (Convenio internacional por la represión de la trata de personas i de explotación de la prostitución aliena del 4 de mayo de 1949)

Por lo que dentro de este modelo convergen distintas corrientes como el abolicionismo clásico, radical, la criminalización del cliente, o el abolicionismo mixto o moderado. (Grup Antígona, 2014)

⁷ Se habla de apariencia, ya que a causa del estigma social y jurídico pese el cambio de vestimenta y la conducta pública, no inmutaba la concepción que se tenía de ellas, por lo que el Estado pretendía configurar una mera ficción aparente.

Esta última idea es la que aflora actualmente en España en el ámbito político y en menor medida en el ámbito jurídico penal. Ahora bien, el marco legal español incardina un vacío legal, en tanto que no es una actividad ilegal tipificada, pero tampoco se le reconocen derechos laborales, ni ostentan de marco jurídico propio. En otras palabras, el Estado no interviene en la actividad cuando ésta es ejercida de forma voluntaria, sin coacción, amenaza, ni abuso de necesidad, de personas mayores de dieciocho años, azorando su actuación en situaciones de proxenetismo en los casos previstos en el Código Penal.

La *LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal*, modificó los artículos relativos al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución, abordando la tipificación del tráfico de seres humanos (art. 177.bis CP, de 23 de noviembre) y sancionando a quien «induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad» (art.188 CP, de 23 de noviembre) es decir, se penaliza la falta de consentimiento real y eficaz en virtud de las circunstancias personales de la víctima.

Además, en el artículo 187 tipifica el proxenetismo y delimita el concepto de explotación en la prostitución. En una primera lectura del articulado, lo podríamos asimilar a situaciones de tráfico de seres humanos, pero cuando lo desnudamos y nos quedamos en la idea meramente, observamos la ausencia de elementos que lo configura, como el traslado o la captación. Tal es el caso, que resulta apabullante dentro del marco jurídico del ejercicio de la prostitución cuando se trata del mismo caso pero con personas mayores de edad y con capacidad jurídica. (Grup Antígona, 2014)

Muy sucinta de este precepto, la *LO 4/2015, de 30 de marzo* con la finalidad de preservar la seguridad ciudadana y la pacífica utilización de los espacios públicos, considera infracción grave comportamientos, calificados como “incívicos”, de la prostitución ejercida en las vías públicas.

A este baile que se ha estado trayendo respecto a las distintas leyes que afectan a la prostitución, cabe añadirle la *LO 3/2009 de 11 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España*

y su integración social, que pese no regular el fenómeno directamente, tiene un gran impacto en las condiciones de vida en las personas extranjeras en situación irregular que desempeñan la prostitución.

Esta ley confiere distintas alternativas para legalizar esta situación anómala de las personas que ya se encuentran en España, a través de autorizaciones de residencia y trabajo, ya sea por cuenta ajena, para investigadores o profesionales cualificados, víctimas de violencia de género, o por la reagrupación familiar o una autorización para el arraigo laboral o social.⁸ Por lo que, partiendo del axioma; ‘la prostitución esta yuxtapuesta a la inmigración y a las políticas migratorias’ y considerando esta actividad como trabajo, éstas personas estarían migrando para trabajar en sectores desregularizados o en actividades informales, como ocurre en otras actividades que si tienen acceso y con condiciones semejantes.⁹ (Grup Antígona, 2014)

Aunado a estas nociones, la despenalización estatal ya vista, evidencia la intervención de otros poderes públicos que a través de instrumentos jurídicos tienen la potestad de adoptar normas en el marco de sus competencias.

Esta idea vicarial, se efectuó en ordenanzas municipales donde a través de competencias en materia de urbanismo, licencias de actividades, viviendas o preservación de barrios y espacios públicos, se ha conseguido prohibir los servicios sexuales en espacios públicos, acopiándose de argumentos como la “preservación del espacio publico, de los derechos de los menores, o evitar el entorpecimiento del trafico vital” (Villacampa y Torres, 2013: 4)

Las consecuencias de esta falta de regularización y consideración como trabajo integrado en el mercado laboral, es la imposibilidad de acceder como trabajadoras al sistema publico de salud y jubilación, así como la desprotección en situaciones de abusos económicos.

⁸ Artículos 16 a 19, 31.3, 31 bis, 38, 38 bis, 38 ter. de la LO 4/2000 Así como el art 124, del Reglamento 557/2011.

⁹ Ejemplo: trabajo domestico/ agricultura

Esta cuestión de carácter laboral ha entrado en una cierta polémica entre la jurisprudencia social, pues mientras una parte lo niega, otra busca su reconocimiento en un contexto de dependencia laboral limitada por el Código Penal. Otra corriente, persigue el desarrollo de los derechos laborales, entendido como el único medio eficaz para desarrollar los derechos de las prostitutas. Esta idea de reforzar el marco de derechos bascula sobre la conciencia de las administraciones locales, de la legalidad y reconocimiento social de actividades propias de la prostitución. (Grup Antígona, 2014)

A continuación se presentan diversas cuestiones sobre como se aborda el tema y que solamente se apunta algunos argumentos dentro de la jurisdicción social.

La jurisprudencia abolicionista, mediante los artículos 1271 y 1275 del Código Civil, esgrima que la prostitución no puede ser objeto de contrato por ser contraria a las buenas costumbres, ni tener causa por ser ilícita e inmoral. (Grup Antígona, 2014)

Un aspecto esencial es la deflexión entre *alterne* y *prostitución*, que consigue acercarse a la regularización laboral de las actividades vinculadas a la prostitución.

El *alterne* es considerado como trabajo ajeno, bajo un contrato laboral regulado por Estatuto de los Trabajadores, o también como trabajo propio que en este caso se atañe al Estatuto de Trabajo Autónomo por los tribunales laborales.

Conceptualizando el trabajo alterne como “aquellos en los cuales una persona, normalmente mujer, queda vinculada con un local comprometiéndose a permanecer en el establecimiento para animar el ambiente e incitar al consumo de bebidas (generalmente alcohólicas) mediante su “atractivo sexual”, obteniendo a cambio una retribución, que habitualmente consistirá en un porcentaje sobre la cuantía de las consumiciones” (Arias, 2009: 41).

Este reconocimiento por parte de los Tribunales se remonta a los años ochenta, donde numerosas sentencias prueban la dependencia de las trabajadoras, aun

cuando el horario sea indeterminado,¹⁰ ya que no se debe entender como una subordinación en sentido estricto, sino basta que se presuma por la permanencia estable de las empleadas,¹¹ ni tampoco lo enerva el hecho de recibir la retribución directamente del cliente.¹²

Con lo cual, aquí hay una puerta abierta a la sujeción de un contrato de trabajo, con las obligaciones y derechos que este ostenta. Entre estos, y como prevé el Estatuto de los Trabajadores, estar dadas de alta en el Régimen General de Seguridad Social, en el caso de trabajo por cuenta ajena, ya que si trabajan de forma autónoma económicamente dependientes, se les aplicará el Estatuto del trabajo Autónomo y estarán sujetas al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

Por el contrario, la prostitución actúa de manera paralela y así lo ha manifestado distintas sentencias, que mientras consideran el *alterne* como una actividad legal encuadrable dentro del contrato laboral, el ejercicio de la prostitución es percibida como un objeto no lícito para constituir contrato.¹³

Esta dualidad a nivel conceptual da paso a la crítica de una parte de la doctrina, que detrae la transmutación del *alterne* a la prostitución, por lo que la ilicitud o lícitud de uno, entronca con la lícitud o ilicitud de la otra.

Como respuesta, la jurisprudencia que precisa esta disociación, reitera que es un modo de combatir las consecuencias sociales y laborales desfavorables que se adicionan a la negación de reconocer los trabajos sexuales.

Como bien apuntaba el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la prostitución independiente y voluntaria constituye “actividades económicas no asalariadas”¹⁴, cuando no haya vínculo de subordinación que estribe en la libre elección y

¹⁰ STS núm 858/2004 de 17 de noviembre

¹¹ Sentencia sala de lo social del TSJ de Navarra de 14 de abril de 2008

¹² Sentencia del TSJ de Castilla y León, num 441148/2011 de 2 de diciembre

¹³ Sentencia de la sala de lo social de TSJ de Catalunya núm 1493/2003 de 17 de septiembre.

¹⁴ Sentencia 20 de noviembre de 2001

condiciones de trabajo y retribución, también cuando se ejerza por responsabilidad propia, y por último cuando haya una remuneración pagada de forma íntegra a la trabajadora sexual.

Un componente más dinámico es la criminalización que persigue la jurisprudencia española, en materia de retribuciones, condiciones de trabajo, horarios y descansos, así como permisos, en definitiva aquellas normas que tienen que ver con la dirección de la empresa en el ámbito organizativo.¹⁵ En este sentido, la imposiciones de condiciones no admisibles pueden resultar compatibles con ilícitos penales positivizados. (Grup Antígona, 2014)

Siguiendo la línea argumental de la doctrina y la jurisprudencia social, pongo de relieve a aquella parte que reconoce la prostitución voluntaria ejercida por cuenta propia. Esta apreciación la podemos ejemplificar en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el 20 de noviembre de 2001 (asunto C-268/99 TJCE 2001, 314). Incluso la magistrada Poyatos sostuvo la posibilidad de adquirir la “condición jurídica especial de TRADE respecto a un cliente, con los efectos inherentes a tal calificación jurídica” (Poyatos, 2009:126).

Para finalizar, cabe añadir que nos hemos adentrado en unas ciertas complejidades que no se han profundizado ya que la idea esencial era tener una visión global de la lógica que conforma el conjunto de normas que asisten a las prostitutas y las divergentes corrientes de pensamiento que de forma coetánea converge entre la doctrina y la jurisprudencia dentro del estado Español.

4.2 CAMBIOS DE LA NORMATIVA EN EL COVID-19

Retomando la línea argumentativa, se apuntaba que el Gobierno, haciendo un ejercicio de realidad, y bajo el amparo del artículo 116 de la Constitución Española, que configura la Ley Orgánica de 4/1981 de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que en su capítulo segundo referente a los estados de alarma, en el artículo 4 apartado b, habilita al Gobierno para declarar el Estado de Alarma por «Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves»,

¹⁵ SSTs 1397/2001 de 11 de julio o 1390/2004 de 22 de noviembre

de esta forma con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se declara el Estado de Alarma, con el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, deber encomendado a los poderes públicos por el artículo 43 de la constitución. Aunque la declaración de estado de alarma no dio suspensión a los derechos fundamentales, como previene el artículo 55 de la Constitución.

A partir de ese momento, los esfuerzos del Gobierno para dar respuesta a la pandemia se estructuraron en torno a dos instrumentos constitucionales. En un primer momento para disminuir la transmisión de la enfermedad y reducir al máximo el riesgo de colapso en los hospitales, se declara el ya mencionado Estado de Alarma con el Real Decreto 463/2020 y las medidas adoptadas en su virtud. Posteriormente se centró en paliar los efectos negativos en el ámbito socioeconómico derivados y reestablecer progresivamente la normalidad, es decir, la vida cotidiana y la actividad económica, por lo que a lo largo del articulado del Real Decreto se habilita a las autoridades competentes en cada caso, para que dicten “cuantos actos y disposiciones sean necesarios”.

En este segundo momento, a medida que transcurría el tiempo y la situación epidemiológica iba mejorando se empezaron a adoptar nuevas normas en aras de flexibilizar y reducir gradualmente las medidas extraordinarias establecidas. Con esta finalidad, el 28 de abril de 2020, el Consejo de Ministros adoptó un Plan de Transición hacia la nueva normalidad, consistente en 4 fases graduables y adaptables a los cambios, que se iban a llevar por unidades territoriales en función de los datos del Covid-19.

Todos estos articulados jurídicos, de una forma directa o indirecta, van a incidir en el conjunto de personas que ejercen la prostitución en los distintos ámbitos como la movilidad, la higiene y la prevención, así como económicamente.

4.2.1 Movilidad

En consecuencia de este Real Decreto 463/2020, se establecieron importantes medidas restrictivas de **movilidad**, tanto a nivel nacional como internacional. En el

mismo decreto se limita, a los residentes, la libertad de circulación en determinados supuestos, (art. 7 RD 463/2020, de 14 de marzo). Como medida complementaria se decretó la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres, con motivo de la situación de crisis sanitaria, y prorrogado mediante las Órdenes INT/283/2020, de 25 de marzo; INT/335/2020, de 10 de abril; INT/368/2020, de 24 de abril; e INT/396/2020, de 8 de mayo, hasta la Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas. Con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se prorrogó los controles restablecidos temporalmente en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas desde el 24 de mayo de 2020 y durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, estableció entre otros parámetros para el desconfinamiento, la “necesidad de gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo” (Orden SNF/403/2020)

De esta forma, surgen una serie de ordenes con tal de evitar la aparición de casos importados, tales como la Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o la Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 , que intensifica las medidas de vigilancia y control higiénico sanitario a los viajeros internacionales, imponiendo una cuarentena de 14 días a las personas que procedan del extranjero.

Además la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, sintetiza el modo concreto en el que llevar a cabo los procedimientos preventivos de control sanitario en los lugares de entrada en España, tal y como prevé en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

A medida que llegaba el verano y los contagios menguaban se elaboraron programas pilotos para la creación de corredores turísticos seguros, pongo de ejemplo la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Por esta batería de restricciones, las prostitutas no solo se vieron afectadas en el ejercicio de su actividad, en tanto que no se podían desplazar para ejercer, sino que también implicó la dificultad de acceso de los clientes nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que el turismo es el eje vertebrador de la economía española.

4.2.2 Economía

A la luz de la crisis mundial que ha provocado el Covid-19 y los efectos inherentes que han tenido las limitaciones de la libertad de movilidad, han ahondado en la actividad productiva, pues el Real Decreto 463/2020, incorpora medidas en la actividad **económica**, concretamente el artículo 10 establece las “*Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos ya actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales*” como consecuencia ha habido un descenso en los ingresos y por tanto una incrementación de la necesidad de liquidez en las empresas y autónomos.

Al no estar la prostitución reconocida legalmente no se puede acoger a esta norma. A estos efectos, la Ministra de Igualdad instó a las comunidades autónomas a cerrar los prostíbulos con tal de frenar los contagios. Azorando esta idea, Quintero

Olivares (2020) reflexionaba, **“el simple anuncio de que hay que “cerrar” locales implica el reconocimiento de que estaban abiertos** desarrollando una actividad que, *a contrario senso*, no estaba prohibida, aunque se diga que no era lícita.”

En otro orden de cosas, el Gobierno de España puramente consciente de la crisis económica que se avenía, calibró la situación y en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, lanza todo un conglomerado de disposiciones para agilizar los mecanismos, ya previstos legalmente, para que empresas y personas trabajadoras puedan «suspender o reducir su actividad, permitiendo, de esta forma, el acceso a las prestaciones económicas necesarias», en particular responde a un doble objetivo, por una parte establecer mecanismos para acelerar estos procedimientos y por otro «proteger a las personas trabajadoras, tanto su salud y seguridad, conteniendo la progresión de la enfermedad mediante el confinamiento y otras medidas de contención, como garantizando el acceso a ingresos sustitutivos a todas aquellas personas trabajadoras que se vieran afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)»

Por estas razones se disponen avales con tal de «resolver los problemas de liquidez» y apoyando «sus decisiones de inversión, mediante la nueva línea de avales de inversión, y su solvencia, mediante la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica» (RDL 34/2020) y establece asimismo, el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo crea el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Instrumento adscrito al Ministerio de Hacienda, gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La orden ministerial publicada en el BOE el 24 de julio, fija el conjunto de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de las operaciones de apoyo público temporal. (Orden PCM/679/2020)

Pero de nuevo la falta de derechos laborales reconocidos, los prostíbulos, los pisos destinados a este ejercicio y las prostitutas por cuenta propia, no se pueden

acoger a esta medida, ya que esta pensada para “empresarios y autónomos” ni tampoco a los ERTE, al carecer de la condición de trabajadoras.

I. Ingreso mínimo vital

En España la distribución de la renta entre los hogares es muy desigual y la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha proyectado sus efectos más perjudiciales sobre «la población más vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que además está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo», por esta razón el 21 de abril, el Ministerio de Igualdad divulgó que las mujeres en situación de prostitución tendría acceso al Ingreso Mínimo Vital que acabaría regulándose por Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo.

A este anuncio, se anexaba un documento de “ampliación de medidas destinadas a víctimas de violencia de género, explotación sexual, trata de seres humanos, y mujeres en contexto de prostitución ” donde enfatizaban la emergencia habitacional y el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con independencia de la residencia legal para aquellas en una “especial situación de vulnerabilidad” (Sánchez, 2020). Sin embargo “la información se difundía a cuentagotas y observábamos problemas recurrentes relativos a la ausencia de garantías en la protección de datos y los obstáculos que podrían surgir al limitarlo solo a “mujeres”, para todas aquellas mujeres trans que no hubiesen podido modificar aún el nombre de sus documentos, entre otros.” (Sánchez, 2020).

Finalmente, en el Real Decreto-ley 20/2020, no se mencionó ni una sola vez, la palabra *prostitución*. A este respecto Mayca Romero señala, “esta promesa **se excluyó en la redacción final**. Las víctimas de prostitución no tienen en muchos casos requisitos como el **año cotizado ni están empadronadas**. La mayoría de las mujeres de trata están **encerradas o bajo dominio de algún proxeneta** y no pueden activar estos recursos”. (Vera, 2020)

De esta forma, los parámetros del Ingreso Mínimo Vital no tienen en cuenta a las mujeres prostituidas. Se problematiza la situación para las personas que ejercen la prostitución se encuentran en situación administrativa irregular. Porque el artículo 7 donde se indican los «requisitos de acceso», señala como primera condición

«tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud», y solo se exceptúan «las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente». A poco que se repare en ello, esta falta de excepcionalidad (por el principio de no analogía y al no mencionarse expresamente) conduce a acceder mediante el umbral de renta, que queda fuera del alcance de todas las mujeres en situación irregular. Además de la problemática que supone obtener el empadronamiento que se engarza con el acceso a la atención sanitaria. La posibilidad de las prostitutas de acceder cae como un castillo de naipes con la exigencia al margen de una unidad de convivencia, la **cotización**, ya que deben acreditar haber cotizado 12 meses, así como haber residido independiente de sus familias en los últimos 3 años, ya que la falta de reconocimiento como trabajo enerva la posibilidad de cotizar.

Por lo tanto se produce una paradoja en la medida en que el estado les exige una cotización para poder acceder a esta cobertura, y a su vez al no se les permite cotizar.

4.2.3 Protección, prevención e higiene

En la aprobación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se modulan medidas para “garantizar de la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.” (Orden SND/399/2020)

Ahora bien, en una visión más purista se refiere a trabajos reglados, discrepando con la falta de consideración de la prostitución como trabajo reconocido dentro del marco laboral, con lo cual, la deflexión de esta regulación se engarza con la posibilidad de acogerse a esta norma, dejando desprotegidos a una gran parte de las personas que ejercen la prostitución.

De igual manera ocurre con las medidas de prevención e higiene de los centros de trabajo establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ya que si la prostitución no es conceptuada como trabajo, el lugar donde ejercen no puede tener la consideración de centro de trabajo y por ende, no es de obligación la aplicación de este artículo, ofuscando la finalidad ultima de prevenir del riesgo de contagio.

4.2.4 Plan de contingencia

La aprobación del Consejo de Ministros Ordinario del 31 de marzo de 2020, del Real Decreto Ley 12/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, fue la manifestación jurídica de la puesta en marcha e implementación del plan de continencia contra la violencia de género durante el Covid-19 a través «de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales (...)» (Real Decreto-ley 12/2020)

En particular, las medidas dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y a las otras mujeres que se encuentran en contextos de prostitución son:

- El derecho a la **información**, que se pretende garantizar con la difusión de los teléfonos de la policía, entidades especializadas, o correos electrónicos (art. 2 RDL 12/2020, de 31 de marzo)
- Medidas para **detectar e identificar a** las víctimas de trata y explotación sexual, así como la vulneración de derechos en contextos de prostitución, llevada a cabo a través de la centinela de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el refuerzo de la información con las ONGs
- **Asistencia integral y protección**, con el mantenimiento de los servicios ambulatorios de asistencia integral, la garantía de alojamiento temporal seguro a las víctimas como servicio esencial, así como el aseguramiento

de la alternativa habitacional a mujeres que, sin encontrarse en una situación de riesgo, quedan en situación de necesidad habitacional.¹⁶ (Ministerio de Igualdad, resumen ejecutivo).

Como crítica a este Plan de contingencia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en una entrevista hecha por el Cuartopoder señalaba que “la principal traba es que en realidad no son medidas que contemplaran en ningún momento “mujeres en contextos de prostitución” sino solamente a las mujeres identificadas dentro del sistema de protección como víctimas de trata.” (Cuartopoder, 2020)

A su vez, también reprueban el uso de las palabras “contexto de prostitución” empleado, ya que “denominar a la prostitución “contexto” es erróneo y redundante en el estigma, porque esta actividad económica ni se “es” ni se “está”; se realiza, de acuerdo con el principio feminista que reconoce la capacidad de agencia de las mujeres. Desde el Ministerio podrían haber recurrido al término de consenso “ejercicio de la prostitución” que proderechos y abolicionistas emplean cuando trabajan juntas en intervención social.” (Sánchez, 2020)

En definitiva el montante de la base es esta falta de categorización jurídica de la prostitución, que no solo se ve repercutida en cuanto se refiere a la protección en los lugares de trabajo, sino también en el compendio de coberturas de la Seguridad Social, así como las medidas de carácter económico destinadas a mitigar la crisis provocada por el Covid-19.

¹⁶ Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y su desarrollo en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

5 CONCLUSIONES

La prostitución con el transcurso de los años ha sido calificada como un constructo de riesgo para las personas que la ejercen. Algunas veces las causas serán imbuidas por decisiones personales (como los riesgos que engendraba el consumo de drogas o alcohol), pero otras muchas, serán producto de diversos factores circunstanciales muy asociados a las pautas culturales que tanto influyen en los estereotipos y que siglos después sus efectos siguen sobrepasando el periodo histórico en el que se desarrollaron.

La retahíla de efectos sociológicos que se conjeturan en la salud física, mental y social, así como en la economía, conciernen en cada una de las formas que adopta el ejercicio de la actividad sexual, y aunque su presencia se manifiesta de manera desigual, todas ellas desembocan en un mar de vulnerabilidad que las coloca en una situación de desventaja social.

Esta vulnerabilidad entra en una especie de espiral cuando hablamos de mujeres, ya que se van a ver sesgadas por su género y por su actividad. Estos dos sesgos pueden actuar independientes, esto es una acumulación de las dos exclusiones, la de mujer y la de prostituta; pero también se pueden interrelacionar, en la medida en que una situación de exclusión empuja al ejercicio de la prostitución, comportando una mayor exclusión y nuevas adversidades que lidiar.

El Covid-19 ha puesto patas arriba a la organización social, con consecuencias perjudiciales para toda la ciudadanía, pero que tildan en aquellos colectivos los cuales ya partían de una situación vertiginosa. Esta no solo va a verse exacerbada, sino que además se van a urdir nuevos retos que van a tener que superar desde una posición poco ventajosa.

La declaración del Estado de Alarma permitió al Estado adoptar medidas de contención y de mitigación del riesgo, que debían proteger la salud y seguridad de todos los ciudadanos, y así se estableció en el preámbulo del Real Decreto 463/2020.

Esto supuso una pequeña luz, algo a lo que agarrarse, para todo el colectivo de la prostitución que andaba desorientada ante los efectos que suponía la situación

incoada, ya que parte de las medidas adoptadas para su contención impedían el ejercicio de su actividad, siendo esta la principal fuente de sus ingresos.

Pero este resquicio de esperanza pareció hacerse más y más pequeño conforme pasaban las semanas, y no es para menos: confinamiento, cierre de locales, aislamiento, mascarillas, cargas familiares... las estaban haciendo más vulnerables y el Estado no reparaba en ellas.

Con esto no quiero decir que todas las medidas y políticas del Gobierno sean decadentes, pero si insuficientes, poco a poco el impacto en las trabajadoras sexuales iba aumentando, dejándolas arrastrar por lo que iba sucediendo sin poder hacer nada.

De mientras, los políticos van en círculos, que si abolición, reglamentación, prohibición... pero sin intentar establecer una medida provisional durante el tiempo que perdure el virus. Prefieren mantenerlas en el limbo legal y pasar de soslayo sus necesidades.

Corriendo el peligro de entrar en un riesgo sistémico que inevitablemente absorba los derechos fundamentales de estas personas. No obstante, este proceso tiene lugar de manera imperceptible, a hurtadillas, para que la sociedad no se entere y una vez más invisibilizar a un colectivo que pide a gritos sordos una actuación.

Como diría Judith Butler, “la vulnerabilidad no ocurre sin más, sino que se encuentra inducida por los Estados y sus raíces son estructurales”

6 BIBLIOGRAFÍA

American Society of Clinical Oncology [ASCO]. *Problemas para dormir: Insomnio* Abril de 2018 (Estados Unidos) Recuperado de: <https://www.cancer.net/es/acerca-de-nosotros/junta-editorial-de-cancernet>

Arias, A (2009) “Prostitución y Derecho al Trabajo ¿auténtica relación laboral?” *Aranzadi Social*, n. 17, págs., 39-48. (citado por Grup Antígona, 2014).

Asensio, J. (28 mayo 2018,). *CATS: El sexo sin consentimiento es violación, aunque sea una prostituta. Cadena SER*. Recuperado de: https://cadenaser.com/emisora/2018/05/28/radio_murcia/1527506457_026958.html

Brewis, J, y Linstead, S. (2000). The worst thing is the screwing (1): Consumption and the management of identity in sex work. *Gender, work and organization*, 7 (2), 84-97. (citado por Fernández, 2011)

Cavalcante Carvalho Moreira, I.M y Ferreira De Souza Monteiro, C. (2012) La violencia en el cotidiano de la prostitución: invisibilidades y ambigüedades. *Latino-Am. Enfermagem* (20(5):[07 pantallas]). www.eerp.usp.br/rlae

Comunicación en Opinión. (23 junio 2019), Las prostitutas no somos violación de pago. *Sindicato de trabajadoras sexuales*. Recuperado de: <http://sindicatootras.org/blog/?las-prostitutas-no-somos-violacion-de-pago>

Constitución de la Organización Mundial de la Salud [Const]. Preámbulo, 7 de abril de 1948 (Nova York) <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf?ua=1>

Convenio internacional por la represión de la trata de personas i de explotación de la prostitución aliena del 4 de mayo de 1949, significa el triunfo de este modelo a nivel internacional.

Cuartopoder (8 de septiembre 2020), Las prostitutas frente a la Covid-19 en ocho preguntas. *Cuartopoder* <https://www.cuartopoder.es/espana/2020/09/08/las-prostitutas-frente-a-la-covid-19-en-ocho-preguntas/>

España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pp. 1995 a 25444.

España. Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado, 12 de diciembre de 2009, núm. 299.

España. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Boletín Oficial del Estado, 5 de junio de 1981, núm. 134.

España. Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Boletín Oficial del Estado, 01 de febrero de 2000, núm. 10.

España. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77.

España. *Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*. Boletín Oficial del Estado, 16 de marzo de 2020, núm. 70.

España. Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Boletín Oficial del Estado 24 de julio de 2020, núm. 201 Recuperado de: <https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/23/pcm679/con>

España. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Boletín Oficial del Estado, 09 de mayo de 2020, núm. 130. Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911>

España. Orden SNF/403/2020, de 11 de mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, Boletín Oficial del Estado, 12 de mayo de 2020, núm. 133. Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4932>

España. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Boletín Oficial del Estado, 14 de marzo de 2020, núm. 67. Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>

España. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Boletín Oficial del Estado, 14 de marzo de 2020, núm. 67. Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>

España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, 25 de Julio de 1889, núm. 206.

España. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Boletín Oficial del Estado, 10 de abril de 2020, núm. 91, pp 27973 a 21980. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4209>

España. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Boletín Oficial del Estado, 1 de junio de 2020, núm. 154, pp. 36022 a 36065. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493

España. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, artículo 7. Boletín Oficial del Estado, 10 de junio de 2020, núm. 163 Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895>

España. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Boletín Oficial del Estado, 18 de noviembre de 2020, núm. 303 Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14368>

España. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de Covid-19. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 2020, núm. 73, pp. 25853 a 25898. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

España. Salud Publica. Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección general de Salud Publica, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. Boletín Oficial del Estado, 23 de noviembre de 2020, núm. 298, Recuperado de: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14049>

Eurofound (2020), *Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?*, Publications Office of the European Union, Luxembourg

Fernández Ollero, M.J. (2011). *Calidad de vida y salud de las mujeres que ejercen la prostitución*. Universidad de Oviedo. [Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo]. https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/12712/TD_MariaJesus-FernandezOllero.pdf;jsessionid=5791AECA217478DEFF357B5EFFA80AEE?sequence=1

Fernández, L. (2011). *Trata de personas con fines de explotación sexual [Trabajo fin de máster]*, Universidad de Salamanca]. Disponible en: <https://gredos.usal.es/handle/10366/99540>

Gálvez L. Ramos, F. Rodríguez, P. (2011): “Género Y Crisis Económicas En La Historia De España”, Comunicación En *X Congreso Internacional De Carmona*, Asociación

Garaizbal, C. (2005). El estigma de la prostitución. *Andaiana*, (citado en Pastor, 2018).

González, P. (2020). Prostitución y coronavirus: crece el sexo en pisos y la vuelta a países de origen. *Información*. Recuperado de: <https://www.informacion.es/alicante/2020/11/22/prostitucion-covid-crece-sexo-pisos-24835509.html>

Grup Antígona. (2014) *Anàlisi de la normativa europea, estatal, autonòmica i local de la prostitució: implicacions per a l'exercici de la prostitució a la ciutat de Barcelona*.

Heim, D. (2007). *Prostitución y exclusión social. Informe de investigación*. Surt. Recuperado de: <https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/w/3/j/0/q/n/0/o/y/1557.pdf>

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. (2020). *Sobre el impacto del Covid - 19 en las mujeres que ejercen la prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual*. Recuperado de: <http://www.hermanasoblatas.org/noticias/oblatas-europa-presenta-informe-impacto-del-covid-19-las-mujeres-ejercen-prostitucion-victimas-trata>

Hermoso, R. (2019). Aspectos psicológicos de la prostitución. En P. Aguilar. (Ed), *Debate prostitución. 18 voces abolicionistas* (pp. 141-153). Madrid: La moderna editorial (citado por Rueda Marroquín, 2019)

Institut Català de les dones. (2020). *L'impacte de gènere de la Covid-19 en dades*. Recuperado de: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/Lim-pacte-de-genere-de-la-COVID-19-en-dades.pdf

Jon Ivar Håvold, E. N. (2009). From safety culture to safety orientation: Validation and simplification of a safety orientation scale using a sample of seafarers working for Norwegian ship owners. *Safety Science*, 47, 305–326. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/233712606_National_cultures_and_safety_orientation_A_study_of_seafarers_working_for_Norwegian_shipping_companies

Juliano, D, (2002). *La prostitución: el espejo oscuro*. Icaria: Barcelona. (citado en Pastor, 2018).

Juzgado de lo Social número 24. (25 de julio 2018) sentencia número 270/2018 [MP. M. Virginia García Alarcón]

Lacpoop. Los beneficios de vivir en comunidad. *Lamadredelascooperativas*.
<https://lacoop.com/beneficios-de-vivir-en-comunidad>

Linda M. Goldenhar, L. J. (2003). Modelling relationships between job stressors and injury and near-miss outcomes for construction labourers. *An International Journal of Work, Health & Organisations*, 17:3, 218-240. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/02678370310001616144>

Llamas, Y. (2019, 7 marzo). Así sobreviven las prostitutas de carretera: «Tenemos miedo». *El Mundo*. <https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/03/06/5c7fcb64fc6c83460e8b4583.html>

López, D. (20 marzo 2020) Prostitutas en tiempos del coronavirus: se reinventan con videollamadas por Whatsapp a euro el minuto. *El Español*. Recuperado de: https://www.elespanol.com/espana/20200320/prostitutas-tiempos-coronavirus-reinventan-videollamadas-whatsapp-minuto/476202447_0.html

Morales, E.M. (2010/2011). *Prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual* [Trabajo de fin de máster, Universidad de Salamanca]. Recuperado de: <https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1218.pdf>

Organización Mundial de la Salud (2017) Salud mental. *World Health Organization*. Recuperado de: https://www.who.int/topics/mental_health/es/

Paniagua, A. (2020). La prostitución callejera se traslada a los pisos particulares. *Burgosconecta*. Recuperado de: <https://www.burgosconecta.es/sociedad/prostitucion-callejera-traslada-pisos-particulares-20200401200848-ntrc.html>

Pastor, E. (2014/2015). *La vulnerabilidad de las mujeres que ejercen prostitución*. [Trabajo fin de grado, Universidad de les Illes Balears]. Recuperado de: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/1530/Pastor_Diaz_Estrella_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Paterman, C. (1995). *El contrato sexual*, Anthropos – Universitat Autònoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Barcelona, 1995.

Perramon, Lourdes (2008): “Trata y prostitución. Análisis de la realidad. Perspectivas de y mitología de trabajo” (Citado por Grup Antígona 2014)

Pinedo, R (2008) *Características, calidad de vida y necesidades de las personas que ejercen prostitución* (Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca). Recuperado de: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/22536/DPEE_Caracteristicas%20psicosociales%20calidad%20de%20vida.pdf;jsessionid=318CA60E87ABCBCD4226A44BE71FC608?sequence=1

Poyatos i Matas (2009) *La prostitución como trabajo Autónomo*, Ed. Bosch Barcelona. (citado por Grup Antígona, 2014)

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000.

Protocolo para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Nueva York: Naciones Unidas, 15 de Noviembre de 2000

Psicoral. (2014) Salud mental. *Psicólogos Alicante*. Recuperado de: <https://www.psicoral.es/salud-mental/>

Quintero, G. (2020). La Covid y la prostitución. *Almacén de derecho*. recuperado de: <https://almacenederecho.org/la-covid-y-la-prostitucion>

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es>

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y su desarrollo en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora,

sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Rodríguez, S. (3 septiembre 2018). La sociedad nos discrimina como mujeres y después, como prostitutas. *Público*. Recuperado de: <https://www.publico.es/sociedad/sociedad-discrimina-mujeres-y-despues.html>

Rueda Marroquín, A. (2019). *Prostitución. Factores psicosociales asociados e intervención psicosocial*. [Trabajo fin de grado, Universidad de Cádiz] https://ro-din.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/23353/RODIN%20AN-DREA%20RUEDA%20MARROQU%20C3%8DN_removed.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Sánchez, P. (15 junio 2020). La prostitución, también en el limbo del Ingreso Mínimo Vital. *Ctxt. Contexto y acción*. Recuperado de: <https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32566/prostitucion-imv-ingreso-minimo-ayudas-gobierno-paula-sanchez-perera.htm>

Sentencia 20 de noviembre de 2001

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete 223/2019 de 17 de julio de 2020 (recurso 197/2020)

Sentencia de la sala de lo social de TSJ de Catalunya núm 1493/2003 de 17 de septiembre.

Sentencia del Tribunal Supremo 1338/2019 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 9 marzo de 2021

Sentencia del TSJ de Castilla y León, num 441148/2011 de 2 de diciembre

Sentencia sala de lo social del TSJ de Navarra de 14 de abril de 2008

Serra, I. (2008). *La prostitución femenina en la Comunidad Valenciana*. Valencia: Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

SSTS 1397/2001 de 11 de juliol o 1390/2004 de 22 de novembre

STS núm 858/2004 de 17 de noviembre

Vanwesenbeeck, I (2001). Another decade of social scientific work on sex work: A review of research 1990-2000. *Annual Review of Sex Research*, 12,242-289. (citado por Fernández, 2011)

Vera, P (23 noviembre 2020), Decepción entre las abolicionistas con las políticas de nueva izquierda. *Diario de Cadiz*. Recuperado de: https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Decepcion-abolicionistas-politicas-nueva-izquierda-feminismo_0_1503749844.html

Villacampa, C. Torres, N (2013), “Políticas criminalizadoras de la prostitución en España. Efectos sobre las trabajadoras sexuales” *Revista Electrónica de Ciencia Penal y criminología*. (citado por Grup Antígona, 2014)

Villacampa, Carolina (2012): “Políticas de criminalización de la prostitución: Análisis crítico de su fundamentación y resultados”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3º Época, nº 27, págs.. 81-142. (citado por Grup Antígona, 2014)